



LA DESINFORMACIÓN, ALIADA DE LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS



AGOSTO 2023



ÍNDICE

LA DESINFORMACIÓN, ALIADA DE LAS ECONOMÍAS ILÍCITAS

Desinformación por acción u omisión	3
1. El Arco Minero del Orinoco esconde la verdad sobre el negocio	6
2. Otros son los responsables del narcotráfico	11
3. Desvían gasolina y también información	14
4. Los casos de trata de personas se conocen a medias	16
5. La extorsión sigue encubierta en la retórica oficial	19



Desinformación por acción u omisión



El gobierno de Nicolás Maduro mantiene una hegemonía comunicacional que le da una ventaja indiscutible sobre cualquier otro emisor en el alcance del mensaje que transmite al colectivo¹. Por un lado, utiliza la omisión, el silencio administrativo y comunicacional y, por el otro, se vale de estrategias discursivas que pintan situaciones sesgadas, manipuladas o de medias verdades que no reflejan la realidad del país. Es el uso de la desinformación como política de Estado para manipular audiencias y crear escenarios a su antojo.

Hechos que colocan hoy a Venezuela bajo la lupa de organismos internacionales, por ser parte o no atender casos de violaciones de derechos humanos o la corrupción, evidencian la permisividad y complicidad de las autoridades en un sinnúmero de irregularidades de las que no puede escapar el escrutinio público.

Durante 2021 y 2022, algunas circunstancias le permitieron esquivar verdades. Así, la aparición

de la Covid-19 en el país (marzo 2020) y la posterior relajación de las medidas adoptadas a propósito de la pandemia, adicionado a la ligera recuperación económica, observada a partir del último trimestre de 2021, han sido aprovechadas comunicacionalmente por Maduro para desviar la atención de situaciones y hechos de interés nacional que afectan la vida de los ciudadanos.

Así, si de actividades ilícitas se trata, los mensajes pueden divulgarse de manera parcial como ocurre en casos de trata de personas; con manipulación como sucede con el narcotráfico y los llamados Tancol, o, incluso, callar, si se trata del verdadero negocio que esconde el Arco Minero del Orinoco.

Mientras la corrupción se ha enquistado en buena parte de las actividades en las que interviene el gobierno, el discurso oficial se planta sobre un supuesto combate contra los ilícitos –con detenidos y acusados– que raramente llega a las altas esferas del poder

¹ <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2022/06/Economia-Illicitas.pdf>



involucradas, como sí ocurrió con el escándalo Pdvsa-Cripto dado a conocer en marzo de 2023.

La explotación y comercialización del oro sigue siendo uno de los secretos mejor guardado de la administración de Maduro. Aunque lo que ocurre en las minas y sus alrededores se conoce por denuncias de las comunidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las autoridades hacen mutis sobre el verdadero negocio del oro, que envuelve violaciones a los derechos humanos y una devastación que se sucede más allá de los 111.843 kilómetros cuadrados que abarca el Arco Minero del Orinoco.

Operativos militares de desmantelamiento de campamentos, incautaciones y aprehensiones para vender una imagen de lucha contra la minería ilegal, trata de personas y el contrabando de oro y drogas. Desde octubre de 2022 el principal vocero de estos operativos es el Comandante Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), Mayor General Domingo Hernández Lárez.

Aunque los precios del petróleo mostraron una recuperación en 2022, ello no se tradujo en ingresos ni para Pdvsa ni para el Estado y la crisis estalló en marzo de 2023, cuando el Ministerio Público y voceros del gobierno anunciaron detenciones por una trama que involucra a la industria petrolera y el sistema oficial de criptovalores. Pero la información se transformó rápidamente en silencio y, salvo anuncio de detenciones, no hay información, explicación ni datos del caso. Según una investigación de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica este caso supone la pérdida de 16.600 millones de dólares (dos veces el presupuesto nacional de 2023), pero nadie en el alto gobierno da respuestas. El mutismo prevalece como una estrategia de desinformación.

Antes de que explotara el escándalo Pdvsa-Cripto, la corrupción en Pdvsa se centraba en una investigación a su expresidente y también exministro de Petróleo, [Rafael Ramírez, y sus](#)

[allegados por un supuesto desfalco de 4.800 millones de dólares](#). Tanto la Fiscalía General de la República como el Ministerio del Petróleo informan muy poco sobre el avance del caso.



Las averiguaciones sobre contrabando de gasolina siguen su curso, siempre apuntando hacia los eslabones más débiles de la cadena.

Entre tanto, la presencia del narcotráfico en Venezuela, endosado casi exclusivamente -aunque sin pruebas- al gobierno colombiano, por parte del fiscal general Tarek William Saab y del diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, parece haber dejado de ser un problema mayor con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia del vecino país, a juzgar por sus declaraciones.

La extorsión, otra de las actuaciones delictivas favorecidas por la impunidad que reina en el país, fue el delito que más creció en 2020, en plena cuarentena por Covid-19, y a expensas de la dolarización de facto.

En julio de 2021 [Maduro ordenó eliminar las irregularidades que se presentan en las "alcabalas"](#) (puntos de control) dispuestas a lo largo del territorio nacional. Y un año después pidió a la ciudadanía denunciar la matraca y los abusos policiales. Sin embargo, las actuaciones han resultado insuficientes para detener este flagelo, que ha escalado en los años más recientes.



La administración de Nicolás Maduro utiliza las diferentes formas de desinformación como un instrumento de manipulación política y para tratar de crear matrices de opinión favorables a su gestión, incluyendo la victimización, según se desprende de un monitoreo hecho a distintos portales informativos, páginas web de organismos del Estado, de organizaciones no gubernamentales y declaraciones de funcionarios de gobierno.

Y sin tanta vitrina oficial, la trata de personas, una de las formas de esclavitud moderna, comenzó a tomar vuelo tras la [crisis humanitaria que llevó a más de 7 millones de venezolanos a abandonar el país](#) desde 2015.

Pero el gobierno sólo actúa, o parece actuar, en casos públicos y notorios, e informa muy poco sobre el desarrollo de estas investigaciones.





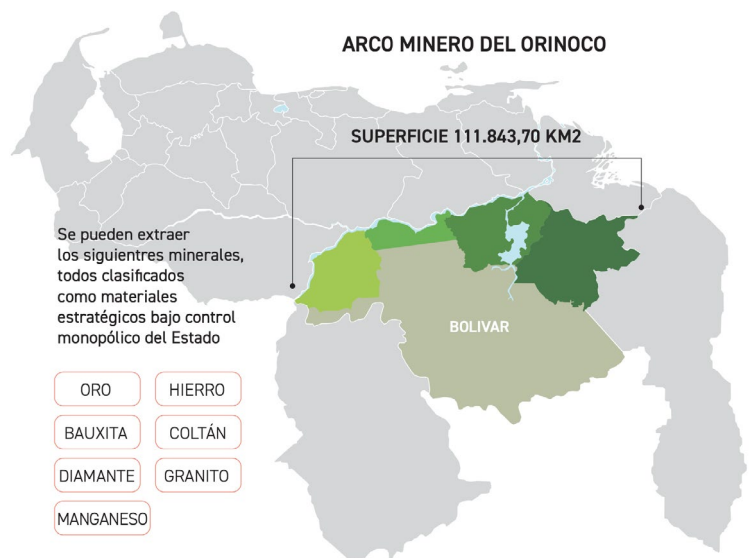
1

EL ARCO MINERO DEL ORINOCO ESCONDE LA VERDAD SOBRE EL NEGOCIO



No todo lo que brilla es oro es el aforismo que mejor describe la trama del Arco Minero del Orinoco (AMO), una zona marcada por la muerte, distorsiones culturales en las comunidades indígenas y la devastación ambiental, sobre cuyos hechos Nicolás Maduro suele no pronunciarse. Un ejemplo es el caso del asesinato del líder indígena y activista ambiental, Virgilio Trujillo, el 30 de junio de 2022, [sin resolver a julio de 2023](#).

Desde 2016, cuando por decreto se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, se han denunciado prácticas ilícitas como el [contrabando de oro, combustible, drogas, armas y municiones](#) en la zona, a la que se suman situaciones de explotación laboral y sexual.





Las autoridades reportan muy poco de todo lo que ocurre en el Arco Minero, una extensión territorial que ocupa áreas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU –el tercero- y el documento “Economías Ilícitas al amparo de la corrupción”² elaborado por Transparencia Venezuela en el año 2022, destacan los resultados de las [batallas de grupos criminales por el control del oro, en connivencia con autoridades](#). Y mientras el daño ecológico continúa indiscriminadamente y parece ignorado por el alto gobierno, Nicolás Maduro pidió en la Cumbre del Cambio Climático (Egipto, noviembre 2022) la creación de un fondo de financiamiento para “proteger” el Amazonas.

“Es necesario concretar sin demora ni artificios burocráticos el fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos (...) Debemos trabajar hasta el último detalle afinando los

mecanismos para que el [auxilio financiero sea de forma directa, justa, oportuna y expedita](#) de manera que llegue a los pueblos más afectados la indemnización por los daños ambientales”, dijo en la reunión de presidentes.

Pero nada mencionó sobre la destrucción de la principal reserva ambiental del país que permite, impulsa y produce su gobierno, al ser socio de las alianzas estratégicas en el negocio del oro, ni [la afectación de las comunidades indígenas](#) de esa región, cuya vida se ha trastocado con la extracción de minerales por distintos grupos que intervienen en esas actividades.

Un estudio realizado para un proyecto del [portal Correo del Caroní](#), publicado en octubre de 2021, demostró que, en Bolívar, 35% de los indígenas de la muestra tenía en su organismo niveles de mercurio por encima de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Hombres trabajan en una mina de oro a orillas de un río en El Callao, estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, el 24 de febrero de 2017. (Foto: Juan Barreto/AFP)

2 <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2022/06/Economia-Illicitas.pdf>



A agosto de 2023, el gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre el tema, como tampoco ha fijado posición sobre la [devastación de la Amazonía venezolana](#) que avanza a pasos agigantados, mientras la [explotación del oro crece de manera anárquica](#).

El portal argentino Infobae tuvo acceso a un documento interno de la compañía aseguradora Lloyd's (publicación de noviembre de 2022), que detectó que [Irán traficó oro desde Venezuela](#) con el avión de Emtrasur ([retenido en Argentina en junio](#)) para financiar operaciones del Hezbollah en el Medio Oriente.

El presidente Nicolás Maduro se refirió por primera vez al caso solo dos meses más tarde que se impidiera la salida del avión del aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), cuando [pidió a Argentina devolver la aeronave](#) (8 de agosto 2022).

En defensa de la operación del aeroplano, el diputado a la Asamblea Nacional chavista, Jesús Faría, dijo en una entrevista a Globovisión el 30 de agosto, que en esa aeronave de carga [se transportaban las vacunas anti COVID al país](#).

Hasta mediados de agosto de 2023 ningún funcionario del gobierno venezolano se había referido al documento de Lloyd's, dado a conocer por *Infobae*.



Wilberto Ángel Camico Menare, desaparecido desde el 28 de diciembre del 2022

Tampoco para esa fecha se conocía de resultados de la investigación del asesinato del líder indígena, Virgilio Trujillo. Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en su [cuenta en Twitter](#), el 5 de julio de 2022 que había enviado un equipo a investigar el suceso, en el que "se presume estén involucrados narcotraficantes y paramilitares que pretenden tomar territorio nacional".

Olnar Ortiz, abogado coordinador de Pueblos Indígenas del [Foro Penal](#) --ONG de Derechos Humanos que presta asistencia jurídica pro bono a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares-, dijo en un video colgado en su [cuenta en Twitter](#), que se le informó en el Ministerio Público que había personas imputadas por el asesinato de Trujillo, sin que se le dieran detalles.

Hasta mediados de agosto de 2023 el caso sigue sin ser esclarecido. Peor aún, otro líder indígena, [Wilberto Camico, se encuentra desaparecido desde el 28 de diciembre](#) de 2022, cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realizaba operativos en la zona contra la minería ilegal, de acuerdo con la [ONG Control Ciudadano](#).

Ese mismo día, en transmisión del Sistema de Medios Públicos del acto de salutación de fin de año, Nicolás Maduro pidió a la FANB multiplicar la [defensa de la naturaleza, selva, ríos y sistema ecológico ante la presencia de bandas criminales](#) dedicadas a la destrucción del ambiente. En ese evento también manifestó que, durante 2022, [se destruyeron 441 campamentos, 61 narcolaboratorios y 118 pistas clandestinas](#).

Tanto Trujillo como Camico tenían en común su rechazo a la explotación ilegal en las minas del Parque Nacional Yacapana, uno de los más afectados por esta práctica, que está destruyendo [todo su ecosistema](#) y la vida de la población autóctona.



El ecocidio en el área del Arco Minero del Orinoco ha sido denunciado, documentado y elevado a instancias internacionales por ONG como SOS [Orinoco](#) y [Fundaredes](#), entre otras.

“La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas”, indicó Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU (MIIV), en el [informe de septiembre de 2022](#).



FEBRERO 2021

**Caracterización y Análisis de
Algunas Variables Socioambientales
Clave en el Arco Minero Del Orinoco**



Mientras esta realidad es reconocida por Naciones Unidas, el gobierno venezolano rechazó el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela y lo calificó de injerencista. “Es un pseudo informe, sin el más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con el país”, respondió a través de [un comunicado](#), publicado en redes sociales.

No obstante las muchas evidencias sobre las irregularidades que se tejen alrededor del Arco Minero del Orinoco, el canciller de Venezuela, [Yván Gil, destacó logros en el combate de los ilícitos](#). En su cuenta en Twitter, publicó el 11 de enero de 2023, que Venezuela “exhibe éxitos en la lucha contra la minería ilegal y la deforestación”. Pero no hay descripción precisa de esos éxitos. Una visita a la zona hecha por Transparencia Venezuela en el primer semestre de 2023 permitió confirmar que las actividades ilícitas son visibles para cualquier ciudadano y dominan el AMO.

La respuesta del gobierno se ha limitado a informar puntualmente de operativos contra la minería ilegal en los que son desmantelados campamentos, se destruyen equipos, se decomisan armas y combustible. En el estado Amazonas se denomina Operación Autana y en Bolívar Operación Roraima. Esta última encubriría una nueva estructura en algunas minas, en las que la fuerza castrense ha desalojado a pranes y grupos guerrilleros para que el control de la actividad aurífera lo asuman las alianzas estratégicas entre organismos del Estado con empresarios cercanos al gobierno. La falta de información da paso a distintas versiones como el control que mantienen militares conjuntamente con los iraníes, según lo reportó la [periodista Sebastiana Barráez](#), en noviembre de 2022.

Nicolás Maduro y altos voceros de su gobierno solo se refieren al tema del oro cuando se trata de las [31 toneladas en custodia del Banco de Inglaterra](#), cuya administración se disputan legalmente Maduro y la Asamblea Nacional electa en 2015, desde 2019, cuando Maduro asumió para un nuevo período presidencial tras unos comicios calificados de fraudulentos y que fueron desconocidos por varios países, entre ellos, Reino Unido.

Piratería, secuestro y robo son los calificativos que suelen usar los altos personeros del gobierno en el caso de la retención de los lingotes y por el cual se victimiza. El 20 de enero



de 2021, el entonces canciller de la República, [Jorge Arreaza, colgó en su cuenta en Twitter:](#) “CRIMINALES! Otra prueba de la crueldad de Guaidó y su banda. A partir del reconocimiento ilegal del Reino Unido a un gobierno ficticio e inexistente, impiden que el Banco de Inglaterra libere el oro bloqueado del Estado venezolano para comprar vacunas para el #Covid19”.

Pero ni la defensa legal del oro de las reservas en poder del Banco de Inglaterra, ni los anuncios mediáticos de combate contra la minería ilegal pueden ocultar los asesinatos (sin culpables), las desapariciones, las amenazas de muerte, las persecuciones, el ecocidio, la explotación sexual y laboral y la trata de personas que rodea el oscuro negocio de la explotación y comercialización del oro en Venezuela. Existe una total opacidad por parte del gobierno.



2

OTROS SON LOS RESPONSABLES DEL NARCOTRÁFICO



NEGACIÓN

En temas como el tráfico de drogas y el contrabando de gasolina los voceros del gobierno hacen anuncios sobre detenciones o desmantelamiento de redes, pero no apuntan a los cabecillas de las bandas, con lo que desvían la atención de los verdaderos responsables. Ejemplo de ello son los Tancol, denominación acuñada por el gobierno de Maduro para referirse de manera genérica a los terroristas armados narcotraficantes colombianos, que operan en la frontera occidental venezolana, a quienes señala de causar enfrentamientos en territorio venezolano y de [ser la punta de lanza para una intervención militar](#) en el país.

La manipulación del discurso oficial es evidente cuando se trata de tráfico de drogas y terroristas. Desde el triunfo de Gustavo Petro como presidente de Colombia, para los voceros de Maduro ya no recae directamente sobre el gobierno de Colombia la responsabilidad por la presencia del narcotráfico en Venezuela, como ocurría cuando Iván Duque se desempeñaba como jefe de Estado.

La presencia del narcotráfico en Venezuela, endosado casi exclusivamente -aunque sin pruebas- al gobierno colombiano, por parte del fiscal general Tarek William Saab y del diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, parece haber dejado de ser un problema con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia del vecino país.

Tras la asunción de Petro en agosto de 2022, Cabello profirió: “con la salida de Duque de la presidencia de Colombia, [se va también la delincuencia organizada de esa presidencia, se va el narcotráfico, se va el paramilitarismo dirigido desde ahí](#), no es que desaparece en Colombia, pero la dirección del narcotráfico desde Nariño se acaba”.

Cabello, sobre quien pesa una [acusación federal del distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo](#) e importar cocaína, ha sido uno de los principales acusadores mediáticos -sin evidencias- de Duque por la presencia del narcotráfico en Venezuela.



El Ministerio Público informó, el 10 de febrero de 2022, que en 16 procedimientos realizados en cinco meses [fueron detenidos 62 integrantes de los llamados grupos Tancol](#), 46 de ellos en el estado Apure. En este estado fronterizo, el 2 de enero de 2022, se dieron [enfrentamientos entre grupos armados ilegales que dejaron 27 muertos](#). Durante varios días, las informaciones se manejaban por algunos de los pobladores o provenían de las autoridades colombianas. El Estado venezolano tardó en pronunciarse sobre el caso y más aún en [desplegar tropas en la zona de combate](#).

Una de las maneras de desviar el foco del problema subyacente como es la presencia permitida de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela, es “atacando” las actuaciones de los Tancol, como muestran las autoridades militares ([caso captura de submarino en aguas venezolanas](#)).



Captura embarcación casco rígido tipo submarino en las márgenes del Río Arauca.

La participación de concejales, alcaldes y diputados del oficialismo en el tráfico de drogas ([enero 2022](#)), fue visto por el fiscal de la República, Tarek William Saab, como una nueva modalidad de captación de funcionarios venezolanos para “[colombianizar la vida política, la vida institucional de Venezuela \(...\)](#)”, e infiltrar algunos estratos de personas que no tienen la suficiente fortaleza moral e ideológica para colocarlos al servicio del narcotráfico colombiano”. Y no como la oportunidad que tuvieron funcionarios públicos para incursionar

en actividades lucrativas ilícitas, valiéndose de los cargos que desempeñaban y de la impunidad que impera en el país.

El general Domingo Hernández Lárez, comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha obtenido visibilidad con los [reportes escuetos sobre los operativos](#) en la lucha contra el narcotráfico y los Tancol. Su cuenta personal en Twitter @dhernandezlarez se ha convertido en el canal de información para dar cuenta de las actividades que se llevan a cabo no solo en materia de [tráfico de estupefacientes](#), sino también en minería ilegal y otras tareas inherentes a su cargo.



G.J. Domingo Hernández Lárez @dhernandezlarez

En labores de búsqueda, detección y desactivación de artefactos explosivos sembrados por grupos TANCOL, FANB localiza e inutiliza 4 explosivos de 5 kg, despejando trocha en el sector El Corozo del municipio Páez, estado Apure.



De manera puntual, publica informaciones incompletas. Básicamente da a conocer el inventario incautado y, en algunos casos, si hay detenidos. En otros, no hay nombres ni sospechosos –que sí identifican medios de comunicación en sus trabajos especiales sobre el Arco Minero del Orinoco y el tráfico de drogas- y se desconoce si todos los casos son investigados por el Ministerio Público.

Si bien el gobierno de Colombia ya no es blanco directo en las acusaciones de Venezuela por el tránsito de drogas en el país, Hernández Lárez,



señaló –tras la [detención en Táchira de tres personas que fungían como narcomulas](#)- que esa práctica no es venezolana.

En Venezuela, las autoridades ya no hablan de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, movimientos guerrilleros que hacen vida en territorio venezolano con la anuencia del gobierno de Maduro.

El término guerrillero parece haber sido sustituido en la narrativa oficial por la palabra terrorista o Tancol. Sin embargo, el gobierno colombiano tiene muy bien ubicado a los grupos guerrilleros en Venezuela, así como [las actividades en las que están involucrados](#).

Una investigación de Insight Crime, de 2023, determina que [los Tancol no existen](#). “El carácter difuso de la presunta amenaza de los Tancol le permite a Maduro presentar una variada gama de operativos de seguridad, muchas veces sin relación entre sí, como una campaña incansable y coherente por la protección de los venezolanos contra un enemigo formidable”, señala el portal.

A pesar de la “lucha contra el narcotráfico” de la que se jacta el fiscal Tarek William Saab, y que exhibe como trofeo, cada vez más aumenta el número de militares venezolanos involucrados en el ilícito, de acuerdo a denuncias recogidas por el portal [Infobae](#).

En los balances semanales ofrecidos por el jefe del Ministerio Público se da cuenta de aprehensiones y acusaciones, pero de personas que integran los eslabones más débiles de la cadena. No hay un alto funcionario preso, hasta ahora, por contrabando de estupefacientes.

Mientras, la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) publica notas de prensa en su sitio web con el resultado de [incautaciones](#), localizaciones de [pistas clandestinas](#) y [desmantelamiento de organizaciones delictivas](#).

En septiembre de 2022, el gobierno de Joe Biden mantuvo a Venezuela en la lista de [países que no se esfuerzan en la lucha contra las drogas](#) ni en la cooperación con Estados Unidos. Venezuela rechazó la decisión de EEUU en un comunicado en el que [reconoce una incautación récord de drogas en 2021](#).



“Resulta ostensible que desde la expulsión de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Venezuela, el Gobierno Bolivariano ha logrado con políticas soberanas, la incautación y los decomisos más grandes de la historia y ha dado guerra sin cuartel contra los narcotraficantes y grupos irregulares al margen de la ley, registrando así en 2021, el récord de incautación de 51 toneladas de drogas en más de 5 mil procedimientos”.

En 2022, [según información del superintendente nacional antidrogas](#), Richard López Vargas, se realizaron 7.113 procedimientos, se decomisaron 41,60 toneladas y se detuvieron a 8.830 personas hasta el 3 de diciembre. Las declaraciones son hechas sin presentar evidencias ni a sus responsables.

Varios de los altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano están acusados por autoridades de EEUU por sus vínculos con el tráfico de sustancias ilícitas, así como de presuntamente integrar el Cartel de los Soles.



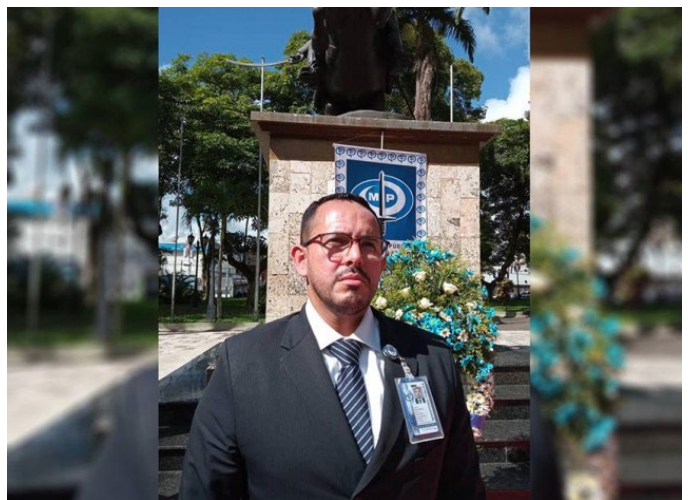
3 DESVÍAN GASOLINA Y TAMBIÉN INFORMACIÓN



Desde la declaración del 20 de enero de 2022 del fiscal general Tarek William Saab sobre la [actuación del organismo en la lucha contra las mafias de la gasolina y funcionarios corruptos](#), las intervenciones públicas del fiscal no han puesto al descubierto a los peces grandes.

Tareck el Aissami, ministro de Petróleo hasta mediados de marzo de 2023, se había sumado a la vocería sobre tráfico de combustible. Este ilícito se lleva a cabo con complicidad de altos funcionarios que nunca quedan expuestos en los procedimientos que se adelantan en la supuesta lucha contra la corrupción.

La [detención de un fiscal superior de Delta Amacuro](#) por presunto desvío de gasolina, la de dos miembros del Ejército y uno de la GNB por la presunta responsabilidad en el [contrabando de 1.700 litros de gasolina](#), así como la [detención de varios conductores de Pdvsa](#), que participaban del contrabando de combustible, son el tipo de informaciones que tanto el fiscal general de la República y el ahora defenestrado Tareck El Aissami daban a conocer públicamente.



En tanto los negocios que el gobierno realiza con terceras naciones, como [Irán para el suministro de combustible](#), no son revelados. De manera puntual se informó -en plena pandemia- de la importación de gasolina para abastecer el mercado interno que sufría una fuerte escasez.



En enero de 2022, el fiscal general sorprendió en una de sus declaraciones semanales al afirmar: “Hemos adelantado acciones durante 2021 y también 2020, cuando este fenómeno comenzó a aparecer de manera progresiva para atacar la economía popular, como es el tráfico de la gasolina, de las mafias que se enquistan incluso muchas veces con apoyo de agentes de seguridad del Estado, que deben ser señalados, identificados y detenidos”.

El comercio ilícito de combustible no es reciente, por lo tanto, el funcionario falsea la realidad. Ha sido un problema que en un principio respondía a los bajos precios (subsidiados) fijados por un Estado productor de hidrocarburos.

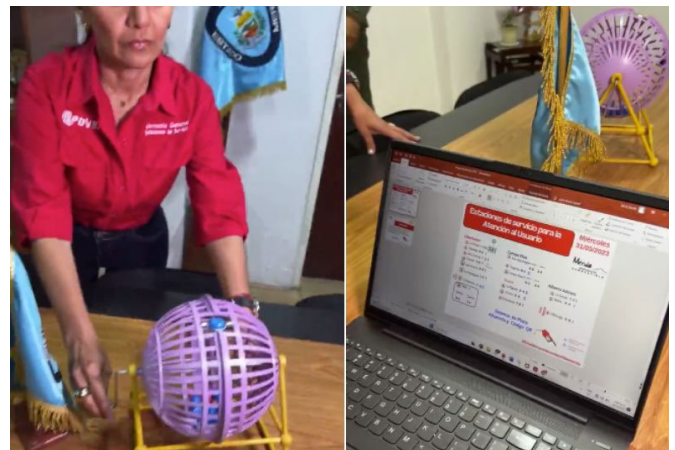
Desde 2019 la razón es otra. La nación petrolera, depende ahora de terceros para poder suplir el mercado interno de combustibles ante la destrucción de la industria petrolera, producto de la corrupción, que llevó a Venezuela de extraer 3,3 millones de barriles diarios a un promedio de 767.000 en junio de 2023, de acuerdo con cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La falta de inversión y mantenimiento a las refinerías ha provocado una fuerte escasez que se padece en todo el país. El discurso oficial responsabiliza a las sanciones impuestas por EEUU por el deterioro de tales instalaciones, que, si bien exacerbaron la situación, no constituyen el origen del problema..

[Las refinerías operan a 10% de su capacidad y procesan unos 135.000 barriles diarios](#), según expertos, mientras que el mercado doméstico demanda alrededor de 250.000 barriles al día. Sin embargo, el viceministro de Comercio y Suministro de Pdvsa, Juan Carlos Díaz, aseguró a la población en junio de 2023 “que [Pdvsa distribuye el combustible necesario para el país](#)”.

Los hechos lo contradicen. A finales de mayo de 2023, el suministro de gasolina no solo se hizo por número de placa como ocurre desde junio de 2020 –en el caso de las que expenden combustible subsidiado-, sino que el racionamiento alcanzó a las llamadas estaciones internacionales fronterizas principalmente, mientras se solventaba el grave problema de unidades paradas en las refinerías que provocó una fuerte escasez a finales de mayo hasta mediados de julio, casi de manera permanente.

La medida inició con un [sorteo \(bingo\) en el estado Mérida](#).





4

LOS CASOS DE TRATA DE PERSONAS SE CONOCEN A MEDIAS



MEDIAS VERDADES

La crisis económica y la crisis migratoria se conjugaron para aumentar el número de víctimas de trata de personas, cifra que se infló con la llegada de la pandemia de Covid-19.

Los anuncios sobre la detección de casos de esta forma de esclavitud moderna se los alternan el fiscal general de la República y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

Los casos de trata de personas se han ido incrementando, a tal punto que a finales de 2019 se [crearon fiscalías especializadas en la materia](#) y, en el año 2022, el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) creó las Coordinaciones de Investigaciones sobre Trata de Personas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en 2020 un informe en el que señala que Venezuela no cumple con los estándares mínimos para combatir la trata de personas y no ha realizado esfuerzos significativos en ese sentido, indicó [Amnistía Internacional](#).

En 2021 explotó un caso que tuvo repercusión mediática, el del [Sambil Model](#), una agencia de la que han salido reinas de belleza, y de la cual cuatro empleados fueron acusados de integrar una red delictiva de trata de personas y explotación sexual. Después de las detenciones y acusaciones en abril de 2021, el Ministerio Público informó en [su cuenta en Instagram, el 28 de octubre de 2022](#), que el juicio iniciaría el 1 de noviembre.

[El 17 de febrero de 2023 fue detenida otra modelo](#), solicitada por el delito de trata de personas, informó el cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).





Al 11 de agosto, la Fiscalía General no ha ofrecido un seguimiento de las investigaciones para conocer el estatus de cada una de ellas. Muchas veces se echan al olvido después de anunciadas, por lo que la opinión pública desconoce el desenlace, o pasan a engrosar la lista de víctimas sin que se visibilicen sus casos y las verdaderas causas, en las que el Estado tiene responsabilidad.

El 21 de enero de 2021, el fiscal general informó [-a través de su cuenta en Twitter-](#) que fue desmantelada una red que explotaba a menores de edad en Apure (estado fronterizo) y cinco personas fueron detenidas e imputadas. Aunque indica los nombres y advierte que hay una sexta por aprehender, no da más detalles del caso.

En julio de 2021, Tarek William Saab ofreció los [números de su gestión](#) en esa materia. Desde agosto de 2017, el Ministerio Público identificó 330 casos con 696 víctimas, por los que se acusaron a 411 implicados y se investigaron a otros 468.

En 2022 correspondió al ministro de Interior Justicia y Paz, Remigio Ceballos, dar el parte en el Día Internacional contra la Trata de Personas: [11 bandas desmanteladas, 20 personas y 42 personas rescatadas](#), aunque no precisó el período en el que se obtuvieron esos resultados.

Bajo engaño y [con atractivas ofertas de trabajo](#), para estudiar o incluso de viaje son captadas venezolanas adultas y menores de edad a través de redes sociales (básicamente) por parte de bandas criminales que las explotan en el extranjero.

El tráfico sexual se ha convertido en un lucrativo negocio. Las autoridades – principalmente el fiscal general- se limitan a dar la información que resulta de los operativos que efectúan, una vez se han hecho públicos los casos, pero omiten señalar las razones que llevan a una parte de la población a aceptar

propuestas –muchas veces bajo engaño- que terminan vulnerando sus derechos humanos..

Extensos trabajos de investigación como el de [Insight Crime](#) y el ya citado de [Transparencia Venezuela](#), sobre el modus operandi de los delincuentes y los destinos de las víctimas, parecen ser ignorados por las autoridades que solo salen a dar la cara a la ciudadanía, cuando hay un caso puntual, para ofrecer un parte con escasa información.

“Y aunque destaca el aumento de personas aprehendidas por este delito, no es posible conocer el seguimiento que a estas detenciones realizan las instituciones encargadas de administrar justicia. Se desconoce cuántas de estas personas detenidas llegan a tener una condena judicial efectiva y cuántas, simplemente, quedan libres”, dice el [informe Mulier](#).





“El año 2022 presenta las cifras más altas que hemos registrado en nuestro monitoreo desde que comenzamos a hacerlo en 2019. El total de rescatadas de redes de trata es de 1.390 venezolanas, de las cuales 284 son niñas y adolescentes”, [informó Mulier Venezuela en marzo de 2023](#).

A pesar del aumento de casos, este año la Fiscalía no se ha pronunciado sobre esta situación. Solo en el primer semestre de 2023, la asociación civil Mulier da cuenta del [rescate de 267 venezolanas rescatadas de redes de trata, 34 de ellas niñas y adolescentes](#).

En mayo de 2023, el [Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer \(Cedaw\)](#) expresó su “preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas y por el retraso en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas”, y recomendó “combatir el reclutamiento forzoso y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares, en particular en el contexto del arco minero del Orinoco, y a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia, e investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud”.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades venezolanas ha sido la proponer la celebración de un seminario de capacitación contra el tráfico y trata de personas, hecha por el titular de la Fiscalía General, durante la 30ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) que se realizó en República Dominicana entre el 27 y el 28 de julio. También suscribió –el 8 de agosto- [un plan de trabajo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia \(Unicef\)](#).



5 LA EXTORSIÓN SIGUE ENCUBIERTA EN LA RETÓRICA OFICIAL



En 2020, en plena pandemia por Covid-19, la extorsión fue el delito de mayor crecimiento en Venezuela, de acuerdo con el experto en el estudio del crimen organizado, Javier Ignacio Mayorca.

En el balance hecho en agosto de ese año, el fiscal Tarek William Saab informó que durante los tres años que tenía al frente del Ministerio Público, “han sido presentadas un total de [1.546 acusaciones, y se han obtenido 337 condenas](#)” por extorsión y secuestro. No discriminó por año ni ofreció detalles de los casos.

Para el 3 de junio de 2021, la cifra se ubicaba en 2.923 acusaciones y 2.596 imputaciones por los mismos delitos, indicó en [rueda de prensa](#), en la que detalló que algunos de los casos se sucedieron en el estado Zulia.

“He dado la orden. Señora vicepresidenta, Ud. me garantiza que se eliminen las trabas que se le ponen en las alcabalas al pueblo de Venezuela. Vamos a actuar de otra manera”, [dijo Maduro, en julio de ese año, desde el](#)

[Palacio de Miraflores](#), ante una denuncia hecha por el diputado José Gregorio Correa.

Un año más tarde, la situación no era mejor y el propio [Maduro, en el acto del Día Nacional del Policía, hizo un llamado](#) a “los policías honestos, a la institucionalidad, al poder popular venezolano y en general a todas las instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, a que nos empeñemos en denunciar los abusos policiales, vengan de quien vengan. Nos empeñemos en denunciar la matraca (extorsión)”.

Las actuaciones arbitrarias de policías y militares han sido denunciadas por periodistas y ciudadanos que graban los procedimientos irregulares para darlos a conocer.

Para septiembre de 2022, los ministerios de Defensa y de Relaciones Interiores publicaron una resolución conjunta, que permite a los ciudadanos grabar en video o audio los procedimientos a los que sean sometidos en los puntos de control, por parte de funcionarios



policiales o militares, “sin que puedan ser compelidos a no hacerlo”. Las personas no pueden ser obligadas a entregar sus equipos ni a borrar su contenido, reza el [artículo 20 de la resolución](#).

Desde el Presidente de la República se trata de crear la imagen de lucha contra la extorsión, pero la realidad refleja que la situación sigue presente y afectando no solo a individuos de manera particular, sino al conjunto de la economía, ya que transportistas de alimentos y otras mercancías deben pagar “el peaje” (extorsión) para seguir su paso hacia su destino.

En febrero de 2023, [Fedeaagro denunciaba que las alcabalas no habían sido eliminadas](#) y que “obstaculizan el recorrido de los alimentos. Vemos como todavía para llegar del oriente al occidente del país se tarda hasta 36 horas y se dañan las hortalizas”.

El fiscal general hizo el 31 de julio de 2023 un repaso con grandes cifras de lo presentado en la cita de la 30ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Sin embargo, no dio ninguna referida a extorsión específicamente.

De manera genérica, indicó que [se han imputado 1.849 funcionarios de seguridad del Estado y 67 colaboradores](#), desde agosto de 2017, pero sin hacer distinción de los delitos ni de los cuerpos involucrados. “Han sido privados de libertad 879 funcionarios; y 57 colaboradores; para un total de 936 privados de libertad. Y hemos logrado 465 sentencias condenatorias”, contabilizó.

Un [estudio realizado por Transparencia Venezuela conjuntamente con la firma Ecoanalítica](#), en el primer trimestre de 2022, arrojó que para ese momento la probabilidad de ser extorsionado era de 25%. Es decir, “si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión”.

Zulia es el [estado con mayor número de casos de extorsión entre enero y abril de 2023](#), según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que destaca la violencia con la que se ha presentado el delito este año, ya que ha dejado heridos y muertos en la entidad noroccidental.

El pago de [“vacuna” \(extorsión\) es predominante en Zulia, Táchira y Apure](#), zonas fronterizas, sostiene Fundaredes. “Grupos armados irregulares invaden tierras y extorsionan a ganaderos en la frontera”, dice. Hasta un millón de dólares demandan para devolver tierras y bienes, mientras que “la respuesta del Estado venezolano ha sido prácticamente nula o insuficiente”.



COLOFÓN

El impacto de las economías ilícitas en Venezuela ha estado acompañado durante 2021, 2022 y 2023 por diferentes prácticas de desinformación, de parte de los funcionarios responsables de dar respuesta a los problemas.

Esta estrategia se ha hecho a través de:

1. Datos imprecisos
2. Presentación de informes generales de éxito con grandes números, pero sin pruebas
3. Datos contradictorios entre organismos responsables
4. Señalamiento de responsabilidad a terceros (fuera del gobierno) de obligaciones internas
5. Silencio ante denuncias
6. Ocultamiento de información
7. Manipulación de información

El seguimiento y validación de la veracidad, oportunidad y credibilidad de la información relacionada con los ilícitos, es la primera condición no solo para el diseño e implementación de políticas y procedimientos para atacar las irregularidades, sino para la acción preventiva y protección de los ciudadanos, ante el aumento continuo de las economías ilícitas y las organizaciones criminales que las dirigen.



TransparenciaVenezuela



@NoMasGuiso



nomasguiso



Transparencia Venezuela



TransparenciaVenezuela